Doctor Arturo Fernández,
Rector del Instituto Tecnológico Autónomo de México.

Maestros, investigadores y ponentes.

Señoras y señores:

- El tema de este seminario convocado por el ITAM es fundamental para el desarrollo presente y futuro del país.
- El sector eléctrico enfrenta un gran reto. La demanda por electricidad en México crecerá por arriba del 6 por ciento durante los próximos años debido al comportamiento de la economía nacional, la composición demográfica del país y el aumento en los niveles de vida.
- Será necesario incrementar en 6 años más de una tercera parte la capacidad actual de generación y ampliar ^{además de} modernizar los sistemas de transmisión y distribución.

- Para realizar estas obras se requieren 250 mil millones de pesos, que es aproximadamente una cuarta parte del total del Presupuesto de Egresos de la Federación de 1999.
- Ante este gran reto el Señor Presidente de la República, envió al Constituyente Permanente una iniciativa de reforma a los artículos 27 y 28 de la Constitución.
- La reforma propuesta generará las condiciones legales e institucionales para garantizar un suministro de energía eléctrica para cubrir las crecientes necesidades de todos los mexicanos, reafirmando la rectoría del Estado en un sector eléctrico fortalecido con más participación y competencia.
- Una vez discutida y aprobada la reforma, el Presidente de la República enviará al H. Congreso de la Unión un paquete de reformas a la legislación secundaria sobre la materia.

- Con ello, se establecerá el marco jurídico para transitar hacia un mercado de electricidad que facilite la concurrencia de los sectores social, público y privado.
- Se permitirá la competencia en el área de generación, habrá regulación económica en transmisión y distribución, y el Estado mantendrá la rectoría del sector eléctrico nacional.
- Esta iniciativa ya ha comenzado a discutirse. Se han expresado algunos cuestionamientos, a los que posteriormente daré respuesta.
- En esta iniciativa no hay ni aversión a lo público, ni atentado contra la soberanía, por un supuesto afán privatizador. Si la privatización fuera el objetivo de la reforma, simplemente se estaría considerando la venta inmediata de la CFE y de LFC.

- Pero lo que la reforma propone es sumarnos a la corriente de cambio tecnológico y regulatorio que se está viviendo en el resto del mundo, para asegurar que el sector eléctrico continúe siendo sustento del desarrollo económico y del bienestar de la población.
- Para lograr este objetivo, es indispensable:
 - asegurar los recursos necesarios para la modernización y expansión del sector, mediante una mayor apertura a la inversión privada;
 - lograr, ahora y en el futuro, menores costos y precios de la electricidad, a través de una mayor competencia entre todos los participantes en la industria eléctrica, y
 - asegurar una confiabilidad creciente del servicio, con inversiones suficientes para contar con tecnología de punta, mayores opciones para los consumidores, y una adecuada regulación por parte del Estado.

- La participación privada es un medio, no un fin en sí mismo. De ahí que la iniciativa proponga que, durante esta administración, se realice la reforma del sector y su apertura al capital privado en nuevos proyectos; no se pretende convertir en empresas privadas a las empresas resultantes de la transformación corporativa de la CFE y LFC. La participación de capital privado en las empresas públicas existentes corresponde a una tercera etapa de la propuesta, que en todo caso quedará a cargo del próximo gobierno.

1. Se afirma que la propuesta es un debilitamiento del Estado y un atentado contra la soberanía.

- La apertura que se plantea no implica abandono por parte del Estado ni debilitamiento de su capacidad rectora o de defensa de los intereses soberanos de la Nación.

- La propuesta de reforma reafirma la rectoría del Estado, en un contexto de mayor apertura y competencia, para asegurar que los beneficios lleguen a todos los usuarios.
- De ser aprobada la iniciativa, la participación del Estado en la industria eléctrica comprendería:
 - la conducción de la política energética del país;
 - la realización de los programas de electrificación en el campo y en las colonias populares;
 - el otorgamiento de subsidios transparentes y directos en los casos socialmente justificables;
 - la generación de energía eléctrica nuclear;
 - la operación de algunas plantas hidroeléctricas y la de otras para respaldo de todo el sistema eléctrico;
 - el control operativo de la red nacional de transmisión en forma exclusiva,

- y la regulación de la industria eléctrica en general.
- La soberanía es la facultad esencial para asumir nuestras propias decisiones, en ejercicio de nuestra independencia. Es, en síntesis, la capacidad de autodeterminación de los pueblos.
- La iniciativa de reforma al sector eléctrico en nada atenta contra nuestra soberanía, sino que por el contrario, la fortalece. En primer lugar, se está llevando a cabo, conforme a la ley, el proceso de modificación constitucional, en el que participan los Poderes Legislativo y Ejecutivo, actuando en su calidad de depositarios de la soberanía nacional.
- Y en segundo lugar, la iniciativa de reforma propuesta por el Ejecutivo Federal responde a las necesidades particulares de nuestro desarrollo económico y de nuestra composición demográfica.
- Es una reforma que nos permitirá contar como país con un servicio eléctrico oportuno, confiable y a precios competitivos.

- Este suministro nos permitirá seguir siendo una nación soberana en el siglo XXI, pues hará más competitiva a la planta productiva nacional, más sólida la estructura financiera del Estado mexicano y nos permitirá destinar más recursos a programas sociales.

2. Se afirma que no hay un problema en el sector eléctrico.

- Se ha argumentado que no está en crisis el sector eléctrico nacional, como si el planteamiento del Ejecutivo estuviese sustentado sobre una situación de emergencia inmediata.
- El objetivo de la reforma es precisamente anticiparse a una situación que pudiera llegar a ser de crisis, si no se actúa con oportunidad.
- Anticiparse para evitar que aumentos inesperados de la demanda, como los que hemos vivido los últimos años (y que explican por qué los tiempos para añadir nueva capacidad se estén reduciendo sensiblemente), superen nuestra capacidad de respuesta.

- En suma, lo que se busca es tomar ahora las medidas necesarias, que muchos otros países ya han adoptado, para evitar situaciones de desabasto de electricidad o de pérdida de competitividad de nuestra planta productiva por problemas de costo o calidad del suministro.
- Efectivamente, en años anteriores la demanda de electricidad también ha crecido a tasas muy altas, incluso superiores al seis por ciento anual que conservadoramente se estima para los próximos años.
- Como ejemplo, las elevadas tasas de crecimiento de la demanda eléctrica durante 1958-1964 se tradujeron en un incremento sexenal de apenas 2,250 MW, cantidad equivalente a lo que en promedio tendremos que añadir anualmente en los próximos seis años.
- Lo que antes tomó seis años, ahora habrá que hacerlo en un solo año y en un futuro próximo seguramente en meses.

- No podemos ignorar que el crecimiento del sector eléctrico se ve reflejado en una participación cada vez mayor de este sector en la actividad económica nacional.
- Esto implica necesidades de inversión crecientes en proporción al producto interno bruto y al ahorro total del país, a tal grado que su financiamiento ha rebasado ya las posibilidades del sector público y se ha tenido que recurrir en forma creciente al uso de recursos privados para tal efecto.
- Por otra parte, las necesidades del sector no se limitan a aumentar la capacidad en 13 mil MW. A menos que estemos dispuestos a no reponer plantas y equipo obsoleto, paralelamente habrá que renovar el parque de generación, al tiempo que también se moderniza y se expande la infraestructura de transmisión y distribución.

- Además, todo esto habrá que continuar haciéndolo por muchos años más, de tal forma que los requerimientos de inversión se seguirán acumulando en forma exponencial hasta entrado el próximo siglo.

3. Se afirma que la industria eléctrica es autofinanciable bajo el esquema actual.

- Si bien la situación financiera de la CFE es sana a primera vista, esto se ha logrado sólo en función de que una parte creciente de las necesidades de inversión del sector eléctrico se han venido financiando con recursos privados y, por ende, no han gravitado sobre el presupuesto de inversión de la CFE.
- Además, en el presupuesto de operación de la CFE aún no se reflejan los pagos que habrá que realizar a los inversionistas privados en un gran número de proyectos financiados que entrarán en operación en los próximos años.

- Es cierto que la CFE ha tenido superávit en los últimos años. En la actual administración, el superávit acumulado es de 19,990 millones de pesos, a precios de 1999. Sin embargo, esta cifra está muy por debajo de las inversiones financiadas con recursos privados, por 52,612 millones de pesos, que implican obligaciones de largo plazo a cargo de la CFE y compromisos contractuales a cargo del gobierno federal.
- No podemos ignorar que si estas inversiones se hubieran tenido que realizar exclusivamente con recursos presupuestales de la CFE, el organismo habría incurrido en un déficit de 32,622 millones de pesos a precios actuales, el cual habría tenido un impacto nocivo no sólo sobre la situación financiera de la CFE sino sobre las finanzas públicas en su conjunto. En todo caso, los costos de estos proyectos financiados en forma privada gravitarán en el futuro sobre las finanzas de la CFE.

- Lo que la reforma pretende en este sentido no es otra cosa que crear las condiciones necesarias para que las inversiones privadas continúen fluyendo, pero sin que las mismas impliquen obligaciones de largo plazo a cargo de los suministradores públicos o tengan que estar garantizadas por el gobierno, como sucede en la actualidad.
- Por otra parte, no debe ignorarse que durante la presente administración, LFC ha incurrido en un déficit de operación de 37,595 millones de pesos a precios actuales, el cual ha sido cubierto con transferencias de recursos fiscales del gobierno federal. Este déficit supera en una relación de casi dos a uno el superávit acumulado de la CFE.
- De esta manera, el sector eléctrico en su conjunto ha recibido en los últimos cinco años, recursos públicos por 17,605 millones de pesos e inversiones privadas (que implican obligaciones a cargo del sector público) por 52,612 millones de pesos, todo esto por encima de los recursos que ha generado con su propia operación.

- Así, examinada en forma objetiva, es claro que la situación financiera de los suministradores públicos dista mucho de tener la capacidad de sustentar por sí misma la expansión y modernización que requiere la industria eléctrica hoy y en el futuro.
 - Hacerlo sin la inyección de más recursos privados sólo sería posible afectando otros rubros del gasto público, incluido el social; querer hacerlo sin esta afectación, es sencillamente imposible, salvo que se esté dispuesto a recurrir a mayores cargas fiscales o mayor endeudamiento público.
- 4. Se afirma que, según lo que ha ocurrido en otras partes del mundo, no habría una baja en costos ni en tarifas.**
- Además, se ha dicho que, salvo algunas excepciones, la experiencia internacional no es buena.
 - Los países que han reformado sus sectores eléctricos han tenido éxito en el cumplimiento de los objetivos que plantearon.

- Países como Australia, España, Estados Unidos, Noruega o el Reino Unido, iniciaron procesos de reforma con el fin principal de reducir los costos de operación de sus sistemas eléctricos.

- Otros países, como Argentina, Chile y Guatemala, llevaron a cabo reformas con el fin principal de abrir nuevas fuentes de inversión.

- En todas estas experiencias se han logrado los objetivos plantados.

- La reducción de costos en estos sistemas se puede medir a través de los cambios en las tarifas eléctricas. En el Reino Unido, por ejemplo, los precios residenciales cayeron en 23 por ciento, mientras que las tarifas comerciales e industriales cayeron en un rango de 24 a 30 por ciento. En Argentina, hubo una reducción en los precios al mayoreo de 49 dólares por MWh en 1992 a 24 dólares por MWh en 1998.

- El cuadro siguiente muestra algunos resultados:

Cambio promedio anual en los precios reales de la electricidad, en porcentaje, a partir del momento en que se llevó a cabo la reestructuración.

País	Años	Residencial	Comercial	Industrial
Argentina	1992-1997	-6.0%	--	-3.5%
Australia	1992-1997	-1.4%	-3.7%	-3.7%
Chile	1990-1997	-8.9%	-9.5%	-9.0%
Guatemala	--	--	--	--
Nueva Zelanda	1996-1997	+3.9%	-1.1%	+0.8%
Noruega	1991-1996	-0.6%	--	--
España	1998-1999	-2.8%	-3.0%	-0.4%
Reino Unido	1990-1997	-1.3%	--	-3.7%

- Si comparamos la tarifa residencial de México (5.5 ¢ de dólar por KWh) con la de los otros países, vemos que efectivamente, nuestra tarifa es de las más bajas; sin embargo, la comparación correcta no es entre tarifas.

- La comparación correcta es entre lo que le cuesta al país suministrar electricidad a los usuarios, lo cual incluiría el subsidio en el caso de México. En este caso, el costo medio del KWh para los usuarios residenciales no es de 5.5 sino de 8.1 ¢ de dólar por KWh, lo cual nos coloca en niveles cercanos a los promedios internacionales.
- Esto puede constatarse, por ejemplo, con los niveles de las tarifas industriales mexicanas, las que sin estar subsidiadas, son cercanas al promedio de las tarifas industriales en los EUA.
- Así, no es cierto que los costos de suministro en México sean de los más bajos del mundo. Además, todavía hay espacios para mejorar la eficiencia y reducir costos en cada etapa del proceso --generación, transmisión y distribución-- bajo esquemas competitivos o de regulación por incentivos.

- Al contrario de lo que se dice, es de esperar que con la reforma, se reduzcan los costos. En un ambiente de competencia creciente, los generadores obtienen sus ganancias reduciendo sus costos, ya que sólo las plantas más eficientes son despachadas y la renta que se obtiene depende precisamente del grado de eficiencia con que se opere.
- En transmisión y distribución se regula con base en incentivos, lo que implica por definición que los cargos reales de transmisión y distribución tendrán que bajar.
- Por ejemplo, para el periodo de 1995 al 2000, en el Reino Unido, el regulador convino con las empresas distribuidoras que los cargos de distribución aumentarán al ritmo de la inflación menos el 9.5 por ciento por concepto de los aumentos en la eficiencia esperados durante el periodo.

- Por lo anterior, debe esperarse que con una reforma como la planteada, se reduzcan los costos y, con ello, bajen en el corto plazo las tarifas que actualmente no están subsidiadas, como son las industriales y comerciales.
- Al mismo tiempo, debe preverse una reducción de los subsidios en las tarifas residenciales y agrícolas que, eventualmente, en un plazo de varios años, lleve al punto de equilibrio entre costos y precios para estos sectores. Esto, a su vez, permitirá reducir la carga fiscal y disponer de mayores recursos para fines de prioridad social.
- La experiencia internacional también nos indica que se han canalizado importantes montos de recursos a la inversión.
- Un ejemplo es la expansión de la capacidad de generación en Guatemala, Argentina o el Reino Unido, que se ha logrado con holgura frente a las necesidades particulares de cada uno de estos países.

- Por otra parte, hay que recalcar que ningún país que ha emprendido reformas como la propuesta para México ha revertido el rumbo.
 - Algunos de estos países, se encuentran discutiendo actualmente posibles adecuaciones al marco regulatorio sectorial que fue creado con dicha reforma, para lograr mayores beneficios y asegurar que los mismos se trasladen a los consumidores.
 - Estas adecuaciones no significan un retroceso hacia la estructura que imperaba antes de la reforma, sino que son resultado de un proceso natural de adaptación que sigue los mismos lineamientos de la reforma original.
- 5. Se afirma que la reforma afectaría los derechos de los trabajadores.**
- El gobierno federal ha reiterado que velará por el respeto absoluto de los derechos de los trabajadores de la CFE y LFC, tanto activos como jubilados. Sus derechos laborales están garantizados por la Ley y por sus contratos colectivos de trabajo.

- La reforma propuesta permitirá que el sector eléctrico se convierta en uno de los de mayor dinamismo de la economía nacional. Con esto, se crearán mayores y mejores oportunidades de empleo para los trabajadores de la industria eléctrica, así como para los demás sectores económicos del país.
- Cabe resaltar que no se contempla despido alguno de trabajadores del sector eléctrico. Las condiciones laborales en las nuevas empresas públicas, así como en las que eventualmente tengan capital privado, serán básicamente las mismas que las que prevalecen hoy en la CFE y LFC, ya que por disposición de Ley operará la figura de sustitución patronal.
- Además, los derechos de los jubilados se mantendrán vigentes, para lo cual se prevé constituir los fondos necesarios para garantizar sus pensiones.

6. Conclusiones

- El desarrollo de una industria eléctrica vigorosa es elemento indispensable para el crecimiento nacional y el beneficio de la población en los siguientes años.
- La apertura a la inversión privada permitirá alcanzar ese desarrollo sin limitar la capacidad de recursos públicos para el desarrollo social que queremos para nuestro país.
- Es conveniente analizar la iniciativa de reforma constitucional en materia de electricidad con responsabilidad y objetividad, atendiendo siempre a las necesidades prioritarias del país.

▪ Quienes se resisten a esta iniciativa están en contra de:

- garantizar el suministro de electricidad que requerimos los mexicanos;
- promover la modernización y expansión del sector;
- continuar proporcionando el servicio eléctrico en condiciones que impulsen un mayor crecimiento de nuestra economía;
- crear mayores y mejores empleos para los trabajadores de la industria eléctrica y de todo el país;
- disponer de más recursos públicos que se dediquen a programas de educación, salud, agua y combate a la pobreza, y
- reafirmar la rectoría del Estado en un sector eléctrico fortalecido con más participación y competencia.

▪ Estar en contra de este cambio implica fundamentalmente oponerse a fortalecer el crecimiento de la economía y de aumentar los niveles de vida de la población.

• Finalmente, agradezco a la dirección y a los profesores del ITAM por la organización de este seminario. En especial al Rector Arturo Fernández por su iniciativa y voluntad para la realización de este foro sobre la Reforma Estructural del Sector Eléctrico.

• Muchas Gracias